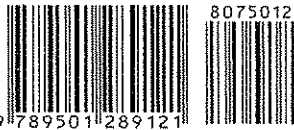


Con la llegada al poder de gobiernos progresistas, en la última década varios países de América Latina han sido testigos de una transformación inédita en el paradigma de los medios de comunicación de la región. Esgrimiendo los mismos intereses que los sectores económicos más poderosos, las empresas mediáticas consolidaron un contrapoder al alzarse como una voz hegemónica que, en no pocas ocasiones, supera incluso la de la oposición política, permitiéndoles establecer su propia agenda en los debates que enardecen la opinión pública. La reacción de los Estados no se ha hecho esperar.

Dênis de Moraes, doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y uno de los teóricos más destacados en nuevas tecnologías, viajó por ocho países del subcontinente para estudiar este proceso e identificar las características de una nueva realidad. En *La cruzada de los medios en América Latina*, el autor analiza con particular agudeza varios de los nudos conflictivos que planean sobre el debate público: la concentración monopólica de los medios y sus implicancias, el valor estratégico de las políticas de comunicación, las transformaciones propuestas desde los Estados (revitalización de la comunicación estatal a partir del surgimiento de medios propios y fortalecimiento de medios comunitarios, legislaciones antimonopólicas, fomento a la producción cultural, etc.), y la siempre conflictiva batalla por la libertad de expresión.

*La cruzada de los medios en América Latina* suma su aporte al desafío que enfrentamos en la construcción de una nueva comunicación: abierta, democrática y plural.

ISBN 978-950-12-8912-1



www.planetadelibros.com  
www.paidosargentina.com.ar



Paidós

L A T I N O A M E R I C A N A

316.77 M 827 Dênis de Moraes **La cruzada de los medios en América Latina**

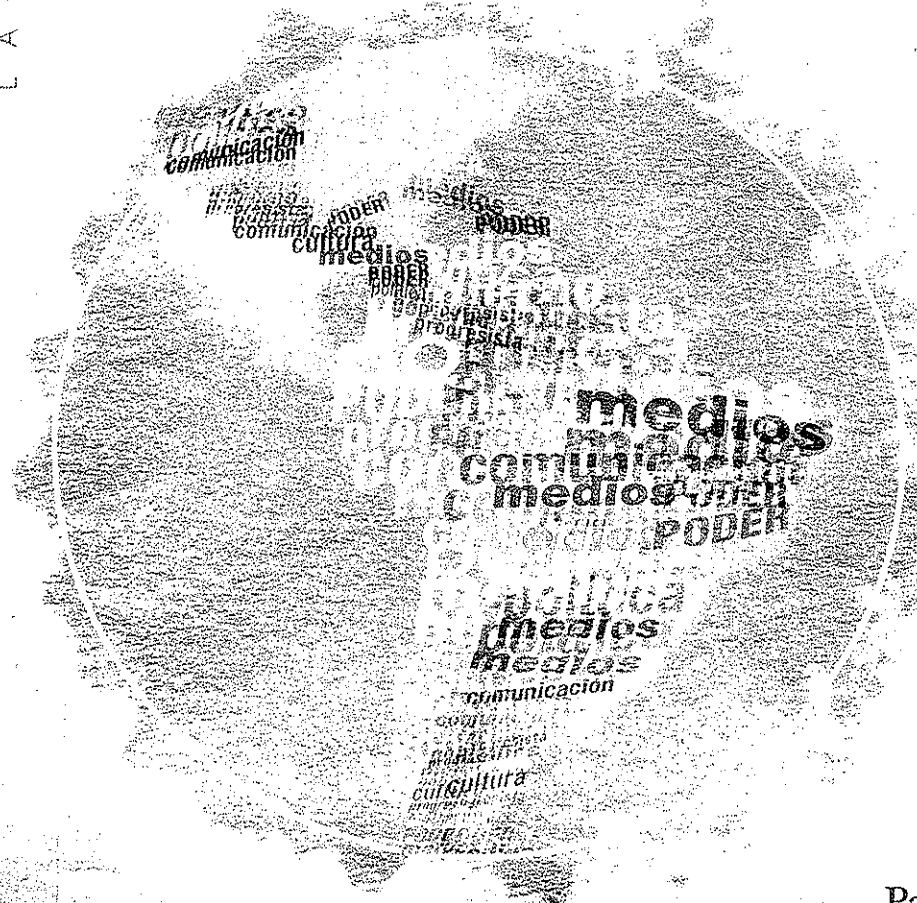
L A T I N O A M E R I C A N A

3391E  
(78 fotocopias)

Dênis de Moraes

# La cruzada de los medios en América Latina

Gobiernos progresistas y políticas de comunicación



Paidós

316.77  
1827

Latinoamericana

Dênis de Moraes

# La cruzada de los medios en América Latina

## Gobiernos progresistas y políticas de comunicación

1. G. O'Donnell: *Contrapuntos*
2. E. Kvaternik (comp.): *Elementos para el análisis político*
3. A. Przeworski: *Democracia sustentable*
4. J. C. Torre: *El proceso político de las reformas en América Latina*
5. L. C. Bresser Pereira y N. Cunill Grau (comps.): *Lo público no estatal en la reforma del Estado*
6. V. Tokman y G. O'Donnell (comps.): *Pobreza y desigualdad en América Latina*
7. J. E. Méndez, G. O'Donnell y P. Sérgio Pinheiro (comps.): *Las deficiencias del Estado de Derecho en América Latina*
8. S. Mainwaring y M. S. Shugart: *Presidencialismo y democracia en América Latina*
9. J. Méndez; G. O'Donnell y P. Piñeiro (compés.): *La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina*
10. M. González de Oleaga y Ernesto Bohoslavsky (comps.): *El hilo rojo. Palabras y prácticas de la utopía en América Latina*
11. J. Blasky-Murray: *Poshegemonía*
12. Dênis de Moraes: *La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y políticas de comunicación*

 Paidós

Buenos Aires-Barcelona-México

FAC. DE PSICOLOGIA  
BIBLIOTECA

Reg. 7518

De Moraes, Dénis

La cruzada de los medios en América Latina : gobiernos progresistas  
y políticas de comunicación.- 1ª ed.- Buenos Aires: Paidós, 2011.  
160 p. ; 22x15 cm.

Traducido por: Márcia Elena Killmann  
ISBN 978-950-12-8912-1

1. Medios de Comunicación. I. Killmann, Márcia Elena, trad. II. Título.  
CDD 302.2

Diseño de cubierta: Gustavo Macri

Traducción: Márcia Elena Killmann

1ª edición, 2011

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la  
autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas  
en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o  
procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

© 2011, Dénis de Moraes

© 2011 de todas las ediciones en castellano,  
Editorial Paidós SAICF  
Independencia 1682/1686, Buenos Aires  
E-mail: [difusion@areapaidos.com.ar](mailto:difusion@areapaidos.com.ar)  
[www.paidosargentina.com.ar](http://www.paidosargentina.com.ar)

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723  
Impreso en la Argentina - *Printed in Argentina*

Impreso en Encuadernación Araoz,  
Humboldt 66, Ramos Mejía  
en abril de 2011.

Tirada: 3.500 ejemplares

ISBN 978-950-12-8912-1

*A la memoria de Salvador Allende.*

## Índice

Prólogo. La disputa y sus matices, <i>Martín Becerra</i> .....	11
Presentación .....	15
1. Travesía hacia el posneoliberalismo .....	25
2. La concentración monopólica de los medios y sus implicancias .....	33
3. El valor estratégico de las políticas públicas de comunicación .....	43
4. Gobiernos progresistas y transformaciones comunicacionales .....	51
5. La batalla por la libertad de expresión: avances y resistencias .....	113
6. Desafíos para otra comunicación posible .....	133
Bibliografía .....	145

Prólogo

## La disputa y sus matices

MARTÍN BECERRA\*

Como en sus libros anteriores, el investigador Dênis de Moraes emprende con esta obra el desafiante objetivo de comprender qué tienen en común y en qué se diferencian los procesos centrales de la estructuración del sistema de medios de comunicación latinoamericano. El autor convoca en las páginas que siguen tanto a conceptos estables en ciencias sociales, como a términos novedosos para extender su lectura panorámica y a la vez profunda sobre el presente regional: globalización, concentración, grupos multimedia, nuevas tecnologías, hegemonía político-cultural, medios comunitarios, y Estado como comunicador de masas, son algunos de ellos.

El libro asume como tema una cuestión que figura como prioridad en la agenda latinoamericana. Frente a las elecciones brasileñas del 3 de octubre de 2010, el entonces presidente Lula da Silva sintetizó lo que viene constatando una gran cantidad de observadores y estudiosos del sistema de medios de comunicación, y lo que señalan periodistas y militantes de muy diversas fuerzas políticas: Lula subrayó la "falta de neutralidad" de los grandes medios, a los que desafió a que reconocieran que "apoyan a los candidatos de la oposición".<sup>1</sup> Situaciones similares se producen periódicamente en casi todos los países latinoamericanos,<sup>2</sup> cuyos principales actores en el universo

\* Profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), e investigador independiente en el Conicet. Es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. "Lula acusó a los medios de apoyar a Serra", en *La Nación*, 19 de septiembre de 2010, consultado en <[www.lanacion.com.ar](http://www.lanacion.com.ar)>.

2. Véase Natanson, José, "By pass mediático", en *Página12*, 29 de agosto de 2010, consultado en <[www.pagina12.com.ar](http://www.pagina12.com.ar)>

FAC. DE PSICOLOGIA  
BIBLIOTECA

de los medios operan con una lógica comercial que tiende a oponerse a toda medida que altere el *statu quo*, partiendo del hecho de que esa alteración afectará, también, su propio interés corporativo.

Si bien los dispositivos masivos de comunicación, entretenimiento e información se corresponden con posicionamientos e intereses definidos, tradicionalmente el discurso de los grandes medios disimuló de manera estratégica sus tomas de posición tras una apariencia de neutralidad, imparcialidad y ecuanimidad en el tratamiento de fuentes, en la construcción de su agenda y en la concomitante omisión o invisibilización de cuestiones sociales, económicas y políticas. La ruptura de esta estrategia no obedece únicamente al signo político de características populistas-progresistas de muchos de los gobiernos de América Latina en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, ya que este proceso también se registra en países con gobiernos populistas de derecha, como demuestran los casos colombiano o mexicano. Pero en el caso de los gobiernos populistas-progresistas, se asiste a una original incursión en un territorio que representaba un verdadero tabú en la historia regional: la intención de modificar el sistema comercial de medios a través de una operación simultánea de producción de nueva regulación y de injerencia del gobierno como importante actor comunicacional.

De modo complementario a la ruptura del credo en la objetividad, la imparcialidad y la neutralidad que afecta al campo periodístico, se produce entonces un inédito interés (y, en algunos casos, avance) de gobiernos sudamericanos en relación con la política de medios. Los gobiernos de la región protagonizan ahora el despliegue de una desconocida actividad como enérgicos operadores de televisión, radio y como editores de diarios, emitiendo así una señal de que consideran necesario construir su propia voz en un sistema mediático al que perciben (y construyen) como antagonista.

La concentración de la propiedad del sistema de medios en torno a pocos y gigantescos grupos que afectan la circulación de contenidos, la centralización geográfica de su producción en torno a las grandes ciudades, la proscripción legal que pesa sobre la mayoría de la población latinoamericana para acceder a la titularidad de licencias de radio y televisión, la ausencia de una regulación explícita que reduzca la discrecionalidad de los gobiernos y grandes grupos, la creciente influencia de los grupos de telecomunicaciones en el sistema de medios de comunicación, y la ausencia de medios públicos, son seis ejes que se articulan en el abordaje que propone Dênis de Moraes en estas páginas.

El gran desafío conceptual del autor es, entonces, comprender los procesos críticos que están modificando el rol de los medios de comunicación y el tipo de intervención estatal que se ejerce sobre su intermediación.

Estos procesos no solo reconocen condicionamientos políticos, económicos y culturales, sino que además se producen en un contexto de mutación

(en el sentido que Alessandro Baricco asigna a este término en *Los bárbaros*) de tecnologías. En efecto, la erosión del contrato de lectura que afecta al sistema de medios y la propuesta de elaboración de nuevos contratos por parte de actores políticos y sociales que no reconocen antecedentes en América Latina, se suceden en el marco de una radical transformación de las rutinas de producción de noticias y entretenimientos, fruto de la convergencia tecnológica entre medios, telecomunicaciones e Internet.

Descolocados por el nuevo escenario que profanó su "inmaculada concepción", los medios tradicionales padecen un proceso de desintermediación de las noticias, gracias por un lado a la inédita discusión sobre su rol, como a la proliferación de tecnologías digitales que permiten producir y distribuir noticias sin la mediación corporativa de grandes empresas. Hasta ahora, el proceso de convergencia y la proliferación de alternativas al modelo *broadcasting* (punto-masa) han sido respondidos con una profundización de la concentración de la estructura del sistema de medios, y con la expansión de la oferta de los principales grupos a través de diferentes redes. Por ello, los primeros afectados fueron las viejas empresas de medios analógicos de capitales pequeños y medianos, condenadas estas a la transferencia de sus activos a los principales actores del sector. Pero el proceso de convergencia, desintermediación y reintermediación está inconcluso y en pleno curso. A la vez, nuevas productoras de contenidos irrumpen como articulaciones de un sistema que precisa de la renovación estética y de la constante actualización tecnológica.

En este contexto, en América Latina, los medios oficiales, de impronta gubernamental, emergen como competencia de los grandes grupos privados. El autor alude a este proceso de disputa por la hegemonía que implica, hasta ahora, la resignación de matices. Para Dênis de Moraes es preciso distinguir tendencias en las intervenciones gubernamentales en la comunicación latinoamericana actual, y las claves para hacerlo radican en el distinto acento que los países colocan en: a) la reorganización de la comunicación estatal y reorientación de las inversiones públicas en el sector, sin fines mercantiles; b) los nuevos canales de televisión en el ámbito estatal; c) las leyes que restringen la concentración y aseguran mayor control público sobre empresas concesionarias de radio y televisión; d) el apoyo a medios alternativos y comunitarios; e) el fomento a la producción cultural independiente; f) las leyes que protegen y estimulan la industria audiovisual nacional; g) los programas de integración regional que involucran intercambios informativos y audiovisuales; coproducción, codistribución y reserva de mercado para películas, documentales y series televisivas.

De modo que el mérito principal de Dênis de Moraes en las páginas que siguen es reivindicar los matices. El autor interroga la complejidad que incubaba la transformación en curso sin resignarse a la tentación de aislar analíticamente su impacto solo al estamento político o únicamente al sistema de

medios. Para comprender esa transformación se requiere integrar en el análisis tanto las regularidades hoy cuestionadas de la historia de la relación íntima que unió durante décadas a gobernantes y medios de comunicación, como la lógica del vínculo cultural que enlaza a los medios con la sociedad en su doble rol de audiencia y de sujeto político. Así, la tendencia actual a discutir la regulación del sistema de medios heredada, en la mayoría de los casos, de las políticas ejecutadas bajo el reinado del neoliberalismo en la región, requiere superar las falacias *ad hominem* tan extendidas como argumentación por parte de los contendientes de la disputa, sean estos grandes grupos de medios o gobiernos.

Si hoy en buena parte de América Latina la influencia e interpelación de los medios aparecen cuestionadas, ello se debe a una multiplicidad de causas que Dénis de Moraes, en una exposición amena y paciente, propone observar en simultáneo con destreza conceptual y notable dominio multidisciplinario.

## Presentación

Este libro amplía, profundiza y consolida estudios que he desarrollado en los últimos años sobre transformaciones en curso en los sistemas de comunicación en Latinoamérica, a partir de la reconstrucción o revalorización del Estado como espacio institucional y ético-político, con la disposición para asumir e implementar políticas públicas que contribuyan a la democratización de la información y la cultura.

Las nuevas acciones comunicacionales se insertan en el contexto de cambios políticos, económicos y socioculturales promovidos por gobiernos elegidos con las banderas de justicia social e inclusión de las masas en los procesos de desarrollo. Me refiero a los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela (1998), Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil (2002 y 2010), Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2003 y 2007), Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay (2004 y 2010), Evo Morales en Bolivia (2005), Michelle Bachelet en Chile (2005), Rafael Correa en Ecuador (2006), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009).

Estos cambios son el resultado de movilizaciones populares en contra de la degradación de la vida social durante décadas de hegemonía neoliberal.<sup>1</sup> Las

1. "El neoliberalismo comprende la liberación creciente y generalizada de las actividades económicas, abarcando la producción, distribución, cambio y consumo. [...] Las actividades económicas son desreguladas por el Estado, y se privatizan las empresas productoras estatales, las organizaciones e instituciones gubernamentales relativas a vivienda, transportes, salud y aportes jubilatorios. El poder estatal es liberado de cualquier emprendimiento económico o social que pueda interesar al capital nacional y transnacional. [...] lo que está en cuestión es la búsqueda de una mayor y creciente productividad, competitividad y rentabilidad, considerando los mercados nacionales, regionales y mundiales" (Ianni, 2004: 313-314).

políticas económicas sometidas al llamado Consenso de Washington y al capital financiero internacional agravaron la concentración del ingreso y el desempleo. Las reacciones en las ciudades, en el campo y en las urnas fueron respuestas contundentes de la ciudadanía al aumento de la pobreza, e indicaron que la mayoría de los habitantes anhelaba interrumpir la reproducción del círculo vicioso de la exclusión transmitida de generación en generación. Volvieron a ganar terreno las demandas por empleo, distribución del ingreso, vivienda, salud, transporte, educación, cultura, medio ambiente y reforma agraria.

En una interpretación visionaria, Mario Benedetti intuyó hace 20 años que un día el continente entraría en erupción para reencontrarse por fin con "su evidente e inconfundible historia: la que se escribe con hechos, con batallas, con trabajo, con dependencias y liberaciones" (1987). De esa forma, expresaba la convicción de que nuestros pueblos no estaban, y no están, condenados a eternizarse como aglomerados sin posición, lugar, opinión, significado o destino, y pueden rescatar los bienes que les fueron usurpados o las ilusiones olvidadas en siglos de vicisitudes.

La intensidad de las transformaciones varía de país en país, lo que indica que la construcción de alternativas no sigue un único y predeterminado patrón —por más que haya, por ejemplo, correlación en los idearios nacionalistas, antineoliberales y antiimperialistas de los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que integran, con Cuba y Nicaragua, la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA)—. La principal meta es fortalecer el Estado como instancia de formulación estratégica, fomento y regulación, comprometido con modelos inclusivos y sustentables de desarrollo. Un Estado que se revele capaz de interactuar con la sociedad, definir y disciplinar la función del mercado en la vida económica e inducir al crecimiento sobre bases más justas.

Por primera vez en el continente prosperan, en las agendas públicas, políticas que reestructuran los sistemas de difusión. Es un intento por superar el histórico letargo del Estado frente a una avasalladora concentración de industrias de información y entretenimiento que están en manos de un reducido número de corporaciones nacionales y transnacionales, propiciando la constitución de auténticos latifundios mediáticos e infoelectrónicos. Legislaciones omitidas o complacientes, y la adhesión de sucesivos gobiernos a las doxas neoliberales del "Estado mínimo" y del "máximo mercado" beneficiaron los controles monopólicos.

En la dimensión de influencia estatal, ahora se busca concretar intervenciones que estimulen difusiones descentralizadas de información, conocimiento y cultura. Las medidas en favor de la pluralización de los medios de comunicación —aunque limitadas o parciales— se sintonizan con estos ideales y se despliegan en medio de disputas por la hegemonía política y cultural. Por un lado, están las fuerzas sociales que apoyan gobiernos comprometidos

con la redistribución de ingresos y riqueza, y la diversidad cultural. Por otro, se sitúa el bloque privatista, formado por élites políticas, económicas y de los medios de comunicación, que está preparado para mantener sus directivas ideológicas y pretensiones lucrativas.

La inspiración para la investigación en la que se fundamenta este libro surgió en los primeros días de enero de 2007 en Santiago de Chile. Mientras contemplaba el flujo bravío y luminoso del río Mapocho, a unas pocas cuadras de la casa-museo del poeta Pablo Neruda, surgieron en mi mente las terminantes palabras del añorado presidente Salvador Allende, en la mañana del 11 de septiembre de 1973, antes de que la fuerza aérea fascista bombardeara el Palacio de la Moneda: "Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor". Lo relacioné con la inquieta Latinoamérica actual y me interrogué acerca de la función reservada a las políticas públicas de comunicación en los cambios inesperados y las posibilidades que nos rodean. ¿De qué manera los gobiernos progresistas<sup>2</sup> intentan concretar el ideario de la democratización de la información y de la producción cultural? ¿Qué tendencias se proyectan a partir de las acciones en curso? ¿Qué avances, contradicciones, perspectivas y disyuntivas se pueden señalar?

Un impulso sanguíneo me hizo concebir una investigación participante que terminara por evidenciar y evaluar el cuadro móvil de alteraciones en ocho países (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Nicaragua y Paraguay). El punto de partida fue el reconocimiento de la relevancia cada vez mayor de las políticas públicas de comunicación, que se entienden como iniciativas de instituciones estatales de todo tipo que, según las concepciones y legitimaciones en cada sociedad y contexto histórico específico, orientan e influyen en los procesos de creación, producción, difusión y consumo de productos comunicativos y culturales en diferentes sistemas, plataformas, soportes, medios, redes y tecnologías (Bustamante, 2005).

Me impulsaron dos puntos de reflexión. En primer lugar, la convocatoria de Edward Said para que el trabajo intelectual enfatice "la necesidad de redistribución de los recursos" y defienda "el imperativo teórico en contra de las inmensas acumulaciones de poder y de capital que tanto tergiversan la vida humana" (2004). En segundo lugar, la constatación de que la comunicación jamás estuvo tan involucrada en la batalla de las ideas por la dirección moral, cultural y política de la sociedad.

2. Adopto el siguiente sentido para la palabra "progresista": una línea de pensamiento que se comprometa rotundamente con todo cuanto se pueda cambiar, transformar y humanizar en la sociedad. Sentido bien cercano al propuesto por Raymond Williams: "Aún se puede usar simplemente como término opuesto a conservador; es decir, para referirse a alguien que aprueba o defiende el cambio". Williams observa que "progresista" se ha utilizado tanto para referirse a la izquierda como para distinguir partidarios de un cambio "moderado y ordenado" (Williams, 2007: 328-329).



Al reconocer la centralidad de la producción simbólica en las disputas de sentido del poder, comparto el pensamiento de Jean-Paul Sartre de que los medios de comunicación desempeñan la función de "servidores de la hegemonía" (1994). Endosan y reflejan el ideario de clases e instituciones hegemónicas, y buscan sedimentar el consenso alrededor de la visión que tienen del mundo. Ocupan una posición preponderante en la esfera de las relaciones sociales, toda vez que fijan los contornos del orden dominante, elevando el mercado hasta una instancia máxima de representación de las aspiraciones. Si prestamos atención a la coyuntura mediática, en la cual la realidad parece estar transfiriéndose a pantallas, celulares y redes sociales digitales, tendremos aún más razones para considerar grave la interferencia de los flujos audiovisuales en el imaginario social.

De ahí la urgencia de ampliar el conocimiento respecto de las experiencias que, a contramano de las ambiciones comerciales y de los controles ideológicos de los medios, intentan reforzar la diversidad cultural y la entienden como un bien común de los pueblos. Se trata de liberar lo que los discursos hegemónicos anhelan silenciar o neutralizar: la emergencia de otras voces, otros principios ético-políticos y otras formas de percibir, traducir y expresar la variedad de mundos que el mundo contiene. La sensible observación de Julio Cortázar continúa siendo válida: "En muchos de nuestros países, el poder no retrocede frente a nada cuando se trata de silenciar una voz que lo delata, porque esa voz llega muy lejos toda vez que se levanta" (2001).

Es importante resaltar que varias iniciativas gubernamentales provienen de reivindicaciones de entidades comunitarias y movimientos sociales, a partir de la comprensión de que la información veraz y el pluralismo son hipótesis indispensables para profundizar la democracia. Aunque no sea el enfoque de este estudio, destaco que innumerables proyectos, concomitantes, en el seno de la sociedad civil, de forma autónoma o apoyados por el poder público, buscan hacer germinar una comunicación ética, participativa, no-mercantilizada y crítica, desvinculada de los medios comerciales y sus conveniencias particulares –aunque se mantenga bastante desigual el cotejo con el poderío de las corporaciones.

En cada viaje que realicé por Latinoamérica pude percibir circunstancias que inciden en la formulación y en la ejecución de políticas públicas, en especial cuando ponen en jaque privilegios de elites políticas y empresariales. Las iniciativas enfrentan fuertes objeciones por parte de las corporaciones mediáticas, en especial cuando entra en cuestión la revisión de leyes de radiodifusión. Los grupos mediáticos no admiten modificaciones que vengán a afectar sus ganancias con las joyas de la corona –las licencias de radio y televisión.

Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador –calificados por Atilio Boron como ejes de la esperanza en la búsqueda de modelos de organización socioeconómica postcapitalistas (2009a)–, y de Argentina, traban duras bata-

llas para que sus propuestas antimonopólicas sobrevivan a las sistemáticas campañas opositoras. No es casual que se trate de los cuatro países en los que están sucediendo alteraciones significativas en los marcos reglamentarios de la radiodifusión. Las contraofensivas mediáticas son evidencia indiscutible de que el afianzamiento de los cambios dependerá de la voluntad política de los gobiernos progresistas y, sobre todo, del respaldo popular.

En muchos momentos recordé el clásico *Las venas abiertas de América Latina* (1977), de Eduardo Galeano, que leí por primera vez en la lejana década de 1970, con el corazón entusiasmado y roto. Galeano se refiere a los contrastes de una región con identidades y tradiciones culturales ricas, devastadas sin embargo por clamorosas injusticias sociales y víctima de dos ciclos del más perverso colonialismo. El primero representado por el pillaje de sus materias primas y riquezas naturales; el segundo, sin que el primero haya desaparecido por completo, marcado por privatizaciones y corrupciones de todo tipo.

A pesar de las mejorías verificadas en la última década, los indicadores de desigualdades y pobreza continúan siendo alarmantes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió, en mayo de 2010, que "los altos niveles de pobreza" muestran "singular persistencia" en la región. Nada menos que 192 millones (34,1%) de sus 565 millones de habitantes viven bajo la línea de la pobreza, y 77 millones (13,7%), en situación de pobreza absoluta (ingresos inferiores a un dólar por día). Según el informe de 2010 del Programa de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (HABITAT), América Latina es la región con mayor desigualdad del mundo. El 20% más rico detenta el 56,9% de los ingresos regionales, mientras el 20% más pobre vive apenas con el 3,5% del total. Cerca del 20% de la población vive en villas o asentamientos precarios.<sup>3</sup>

En medio del prolongado alejamiento de la mayor parte de sus habitantes de los beneficios del progreso, América Latina logra ser única en la capacidad de vislumbrar horizontes que exceden los picos nevados de la Cordillera de los Andes. Nuestros pueblos siguen resistiendo, como las algarabías de los pájaros en las islas salvajes del Pacífico, la desertificación de lo real provocada por tres tiranías siamesas –la del dinero, la de la información y la de la alienación–, denunciadas de forma brillante por Milton Santos (2000).

Prueba de eso son las protestas y manifestaciones que siguen teniendo el paisaje con colores de combatividad indoblegable y de angustia ante la escasez. No he olvidado la emoción en uno de mis paseos dominicales a la Feria de San Telmo, en el frío invierno de Buenos Aires. En medio de la voluptuosidad consumista de los turistas que estaban por todas partes, descubrí una pequeña barraca, casi en una calle lateral, que ofrecía dos cajas de car-

3. "La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir", Santiago, documento de la Comissão Econômica para América Latina e o Caribe/Cepal, 2010. El informe del Programa Habitat de la ONU está disponible on line en <www.unhabitat.org>.

tón con decenas de fotos tomadas en el interior de Bolivia, Perú y Paraguay. Retrataban el largo viaje, sufrido y constante, de familias pobres de descendientes indígenas que se movían por las arterias de la región en búsqueda de pan, tierra, libertad y dignidad.

Tiene pleno sentido que las primeras y esperanzadas señales del posneoliberalismo vengan de nuestros hermanos de la patria grande. Los pueblos marginados de aquí comenzaron a advertir que las presiones organizadas y el coraje cívico pueden apresurar la llegada de utopías vitales, por más arduos y complejos que sean los caminos hasta los escenarios renovadores.

El libro está estructurado en seis capítulos. En el primero, expongo los antecedentes, las circunstancias políticas y las insuficiencias históricas que vienen obstaculizando los rumbos de América Latina a partir de las reacciones populares en contra del aumento de la pobreza en las décadas de 1980 y 1990, que dieron como resultado la llegada de gobernantes comprometidos con la búsqueda del desarrollo inclusivo con justicia social.

El segundo capítulo se enfoca en las implicancias y distorsiones de la acumulación de la propiedad, de los medios y de las tecnologías por grupos mediáticos, configurando un dominio oligopólico sobre el proceso de producción, distribución, circulación y consumo de informaciones y contenidos.

En el tercer capítulo, sitúo la importancia estratégica de políticas de comunicación para el pluralismo informativo y cultural, teniendo en cuenta las innovaciones de la era digital y la necesidad de definir lo que debe ser público y lo que puede ser privado, de modo de proteger las aspiraciones colectivas frente a la avidez mercantil.

En el cuarto capítulo, aprecio el conjunto de iniciativas gubernamentales para descentralizar los sistemas de producción y difusión simbólicos, entre los que están la renovación de leyes y marcos regulatorios, el apoyo a los medios de comunicación alternativos, el fomento a la producción audiovisual independiente, la revitalización de la comunicación estatal, los programas de difusión cultural sin fines de lucro y el fortalecimiento de la cooperación regional.

El quinto capítulo evidencia resistencias y tensiones patrocinadas por las corporaciones de los medios y las elites conservadoras, con la intención de impedir una convicción más amplia alrededor de los cambios en curso. Al insistir en señalar hipotéticas "amenazas a la libertad de expresión", esas corporaciones disimulan lo que los mueve en sus enfrentamientos con los gobiernos progresistas: el temor de que sus ventajas económicas sean afectadas y que se restrinja su desenvolvimiento como actores políticos.

Por fin, en el sexto capítulo, evalúo avances y disyuntivas que puedan acelerar o retrasar los reclamos por una comunicación más democrática en el continente, examinando el enmarañado juego de fuerzas entre ambiciones renovadoras y el poder que los medios aun profesan en la agenda del debate público y en la formación de las mentalidades.

Me gustaría concluir refiriéndome a dos bellos libros escritos bajo el signo de la esperanza, y cuyas líneas de reflexión tienen mucho que ver con la moladura latinoamericana. En *Otros septiembres* (2007) Ariel Dorfman subraya que cada uno de nosotros tiene una secreta manera de buscar amparo en el dolor y, sobre todo, en la esperanza. La expectativa de superación de las adversidades deja de ser clandestina o anónima cuando juntamos coraje para enfrentar las esterilidades de una era de deseos estropeados por el síndrome de la comercialización de la vida.

A la vez, John Berger destaca en *Con la esperanza entre los dientes* (2006) que, si por un lado vivimos en tiempos oscuros, por otro no nos podemos olvidar de que otras épocas también fueron oscuras, y no por eso se extinguieron las luces. Hoy, dice Berger, la esperanza está conectada a una promesa que remite al futuro y deja ver "el deseo de intervenir otra vez en la vida". Y completa: "Una visión alternativa de esperanza es aquella que implica aspirar con toda nuestra fuerza al infinito, ahora. Esto significa devenir y no apenas serlo pasivamente. Este devenir –transformarnos– implica aspirar a algo que supuestamente no es inmediato".

La perspectiva del devenir nos conduce a la necesidad crucial de no prestar anuencia al mundo de la escasez y de la exclusión, sustituyéndola por el consentimiento a un mundo de la distribución y de la igualdad. Eso dependerá no solo de compromisos con la democratización de la sociedad como un todo y de los medios de comunicación en particular, sino también de la conciencia de los pueblos para afrontar los obstáculos a sus aspiraciones más legítimas.

DÊNIS DE MORAES

*América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. [...] La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa [...], como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida.*

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,  
al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1982

*En estos últimos años hay un proceso de renacimiento latinoamericano. Estas tierras del mundo comenzaron a descubrirse a sí mismas en toda su diversidad. Es el arcoíris terrestre que ha sido mutilado por unos cuantos siglos de racismo, de machismo y de militarismo. Nos han dejado ciegos de nosotros mismos. Es necesario recuperar la diversidad para celebrar el hecho de que somos más que lo que nos dijeron que somos.*

EDUARDO GALEANO (2010)

## Capítulo 1

### Travesía hacia el posneoliberalismo

Latinoamérica está en ebullición, quizá como en ningún otro momento histórico. Procesos de transformación se insinúan y se desdoblán en varios países como resultado de movilizaciones de sectores organizados de la sociedad civil y de las revueltas populares en contra del predominio del modelo neoliberal y sus terribles consecuencias sociales en las últimas décadas. El marco inicial de las luchas contrahegemónicas fue la insurrección de la guerrilla zapatista en Chiapas, al sur de México, en 1994, meses después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Siguió la elección de Hugo Chávez en Venezuela, las manifestaciones en contra de la Organización Mundial del Comercio, el G-7, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a partir de las protestas antiglobalización en Seattle, Niza, Praga, Québec, Barcelona, Gotemburgo, Washington, Davos y Génova. La resistencia del pensamiento crítico contribuyó también a nuevos espacios de reivindicación y presión, como el Foro Social Mundial (2001) y sucesos similares que se expandieron por el planeta.

Reflejo de la inconformidad en relación con las desigualdades e injusticias, desde 1999 se eligieron, sucesivamente, presidentes que se comprometieron con programas inclusivos de desarrollo, la distribución del ingreso y el combate a la pobreza y la miseria. Las campañas electorales en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Nicaragua, Paraguay y El Salvador hicieron emerger la repulsa colectiva frente a un contraste inquietante: por un lado, la brutal reducción de las inversiones sociales, el desempleo estructural, la eliminación de puestos laborales, el desmantelamiento de

la seguridad social, el desprestigio de los funcionarios públicos y el recorte en el presupuesto para salud, educación y vivienda; por el otro, las ganancias récord de los agentes del capital con el control oligopólico de la economía, beneficiados por políticas de desregulación, desestatización y privatización.

Esa expropiación de los derechos sociales y laborales se llevó a cabo con el sostén de la mayoría parlamentaria conservadora y el apoyo ideológico de los medios de comunicación, que hicieron todo lo posible para sedimentar el convencimiento social sobre la superioridad hipotética de las "economías abiertas", insistiendo en que no hay salida fuera de lo que supone el mercado. El análisis de Virginia Fontes (2010: 55) es esclarecedor al respecto:

Se trató de introducir una nueva normalidad: segmentar cada situación o derecho vuelto un objetivo inmediato (jubilación, servicios públicos como salud, derechos inherentes a actividades laborales, ambiente, mujeres, racismo) y detenerse en ella de manera exhaustiva, por todos los medios de comunicación, siempre de manera particular. De esa forma, se abrieron formalmente enormes debates "públicos" a la vez que se encapsulaba cada cuestión, aislándola de las demás y del contexto general, sobre todo de la dinámica de los procesos en el plano internacional. Por otra parte, el plano internacional se presentó solo como "modelo", tanto para lo mejor (el "buen" ejemplo, la "buena" y única política) como para lo peor (la tragedia, la catástrofe advertida de los desobedientes o ignorantes). Sobre todo, eran silenciadas las razones causantes del conjunto de los fenómenos, consideradas como ideológicas, y estaban centradas en la urgencia o en "¿qué se puede hacer inmediatamente?". Cada cuestión aislada siempre era señalada como la más urgente, y rápidamente se convertía en cálculos y planillas de costos, sin considerar el contexto abarcador en el cual se volvía comprensible.

En los últimos veinticinco años, durante el apogeo de la internacionalización de la economía, el poder de las corporaciones transnacionales se disparó. Utilizo el verbo "disparar" porque su dominio frente a la fragilidad estructural de países latinoamericanos ya era alarmante en la década de 1970, como señala Eduardo Galeano (1977: 226 y 273) en *Las venas abiertas de América Latina*:

Los capitales norteamericanos se concentran, en América Latina, más agudamente que en los propios Estados Unidos; un puñado de empresas controla la inmensa mayoría de las inversiones. [...] Empobrecidos, incomunicados, descapitalizados y con gravísimos problemas de estructura dentro de cada frontera, los países latinoamericanos abaten progresivamente sus barreras económicas, financieras y fiscales para que los monopolios, que todavía estrangulan a cada país por separado, puedan dar amplitud a sus movimientos y consolidar una nueva división del trabajo, en escala regional, mediante la especialización de sus actividades por países y por ramas, la fijación de dimensiones óptimas para sus empresas filiales, la reducción de los costos, la eliminación de los competidores ajenos al área y a la estabilización de los mercados. Las filiales de las corporaciones multinacionales solo pueden apuntar a la conquista del mercado latinoamericano, en determinados rubros y bajo determinadas condiciones que no afectan la política mundial trazada por sus casas matrices.

Hoy, gran parte de los sectores clave de la economía mundial y regional —telecomunicaciones, energía, agua, petróleo, gas natural, bancos, agricultura, siderurgia y medicamentos— son dominados por las transnacionales, sin que, en la mayoría de los países, haya leyes y normativas jurídicas capaces de controlarlas democráticamente y someterlas al reglamento y la fiscalización del poder público.

Como contrapartida, se agravan las exclusiones sociales. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), divulgado en mayo de 2010, el 34,1% de los 565 millones de habitantes viven bajo la línea de la pobreza, y un 13,7% en situación de pobreza absoluta (ingresos inferiores a un dólar por día). El número de pobres en la región se mantiene 10,1 puntos por arriba de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que son de 24%, y 1,3 puntos arriba de la meta de disminución de la pobreza extrema, del 11,3%.<sup>1</sup> De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 1997 y 2007, Latinoamérica fue la única parte del mundo en donde aumentó el número de personas que trabajan en condiciones precarias: nada menos que el 32,7% de los hombres y el 33,5% de las mujeres.<sup>2</sup> La UNESCO, vinculada a la Organización de las Naciones Unidas, calcula que aún existen 37 millones de analfabetos en el continente, y apenas el 32% de los habitantes consiguen llegar a la universidad.<sup>3</sup>

En un estudio fechado en 1996, Ruy Mauro Marini (2008: 269-270) anunció que frente a la incompetencia y la insensibilidad de las elites latinoamericanas en la conducción de las políticas económicas, no habría alternativa para que se revirtiera la pobreza y la miseria sino por medio de movilizaciones populares y del fortalecimiento del Estado como instancia de regulación, de control y de fomento.

La reacción popular en las ciudades, en el campo y en las urnas fue una respuesta a la devastación social y el resultado del fortalecimiento y de la visibilidad de movimientos demandantes que, a fines de la década de 1990 y al comienzo de la actual, asumieron las luchas por la tierra, por el agua, por el fin de la deuda externa y de las discriminaciones raciales y sexuales, por la identidad cultural y por una sociedad justa y ecológicamente equilibrada.

El ascenso de los gobiernos progresistas en Latinoamérica fue impulsado por la rearticulación de los movimientos indígenas en la zona andina (Ecuador y Bolivia) y en las áreas mayas (América Central y México).<sup>4</sup> Sin

1. Consúltese el documento "La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir", Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010, disponible en <[www.eclac.org](http://www.eclac.org)>.

2. Reuters, 10 de marzo de 2008.

3. Reuters, 20 de febrero de 2008.

4. Immanuel Wallerstein sostiene que el resurgimiento de la Teología de la Liberación está entre los factores favorables a la onda progresista en América Latina: "Los presidentes de Ecuador [Rafael Correa] y de Paraguay [Fernando Lugo] emergieron de esa tradición. Y la inva-

hablar del ascenso de los liderazgos políticos dispuestos a contradecir dos ideas fuerza del neoliberalismo: a) la conversión del Estado en un aparato al servicio de las clases y del bloque de poder dominantes, subordinado al capital y a la globalización de las fuerzas productivas; b) el encuadramiento del mercado como instancia máxima de organización de la sociedad.

Los nuevos liderazgos catalizaron el descontento popular asumiendo propuestas de soberanía nacional sobre las riquezas naturales y en sectores estratégicos, en contraposición con la hegemonía de los mercados financieros y al vínculo con las potencias extranjeras, en especial con los Estados Unidos.

Ahora lo que se desea es la reconstrucción del Estado como espacio institucional y ético político, con capacidad para interactuar con la sociedad y las comunidades locales y para frenar y disciplinar el mercado, regulando las aspiraciones a partir del consenso obtenido junto a un amplio conjunto de clases que ven sus expectativas reflejadas en la acción gubernamental.

Un Estado que extienda su presencia en las actividades productivas no mercantiles y en beneficio del colectivo, en el fomento de políticas sociales inclusivas y en la protección de los derechos de la ciudadanía. Un Estado ético político en la concepción de Gramsci (2002a: 284):

Todo Estado es ético en la medida en que una de sus funciones más importantes sea elevar la gran masa poblacional a un determinado nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que corresponda a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas.

En síntesis, un espacio de soberanía organizada que se expresa en la complejidad de la administración estatal, y que está "constituido de manera que facilite un inmediato desarrollo de la sociedad en el sentido de formas superiores de libertad y responsabilidad social". Un espacio donde se puedan manifestar "las libres organizaciones surgidas como afirmación de intereses legítimos de las clases y de los segmentos económicos y políticos" (Gramsci, 2004: 195 y 222).

El diseño de una América Latina posneoliberal tuvo como piedras fundamentales no solo las exhortaciones de Hugo Chávez en favor de la "revolución bolivariana", sino también las nacionalizaciones llevadas a cabo por Evo Morales en Bolivia. En un primer momento, según José Luís Fiori (2007: 258), parecía que las disposiciones de Morales estaban destinadas a reconstruir el frágil sistema fiscal boliviano. Sin embargo, con la prosecución de las intervenciones gubernamentales en áreas estratégicas, quedó claro que se trataba de una ruptura más profunda con la herencia neoliberal, integrando a Bolivia al

sión de grupos evangélicos protestantes en América Latina puede estar contribuyendo a que el Vaticano sea más tolerante con los teólogos de la liberación, que, por lo menos, son católicos y pueden ayudar a contener esta pérdida de fe en relación con la Iglesia". Véase Immanuel Wallerstein, "Até onde chegou a viragem à esquerda da América Latina", *Esquerda.Net*, Lisboa, 30 de mayo de 2008, disponible en <www.esquerda.net>.

proyecto del "socialismo del siglo XXI" propuesto en Venezuela por Chávez y al cual vendría a incorporarse, en 2006, el Ecuador de Rafael Correa.

Emir Sader (2008b) se refiere a una refundación de los Estados latinoamericanos en una óptica posneoliberal, con el propósito de "buscar formas nuevas de representación política, más allá del formalismo liberal, como los casos de Bolivia, Ecuador –ambos buscan fundar Estados plurinacionales, pluriétnicos– y de Venezuela". En su entendimiento, los nuevos modos de intervención estatal, sin recomponer los Estados que existían antes del neoliberalismo, frenan el desmantelamiento de los aparatos administrativos y revigorizan la regulación en los diversos sectores, además de detener las privatizaciones, aumentar los índices de trabajo formal y mejorar el empleo estatal y los servicios públicos, como en Brasil y Argentina.

Se debe mencionar el éxito de Néstor Kirchner en la pulseada con el FMI, en diciembre de 2004, que dio como resultado una histórica reducción del 25% en la deuda externa argentina. La resistencia de Kirchner representó una ruptura con la tradición de sumisión de los gobiernos de la región en las negociaciones internacionales y contribuyó a la formación de una nueva conciencia alternativa con relación al pago de la deuda externa no solo en Argentina, sino también en otros países latinoamericanos.<sup>5</sup>

Pueden distinguirse dos bloques en los gobiernos de América Latina, diferenciados por los condicionantes socioeconómicos de cada país y por los divajes políticos que inciden en la praxis gubernamental.

El primero está compuesto por la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), fundada en diciembre de 2004 por Venezuela y Cuba y con la posterior adhesión de Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, Antigua y Barbuda y San Vicente, y las Granadinas. Estos países priorizan agendas y asociaciones que viabilicen programas de desarrollo independiente; recusan los tratados de libre comercio y la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y prestigian una integración económica y cultural por fuera del circuito liderado por Estados Unidos –integración ya no basada en la competencia y la competitividad, sino en los principios de complementariedad y cooperación solidaria.<sup>6</sup> Tres países del ALBA –Cuba, Venezuela y Bolivia– erradicaron el analfabetismo, y Bolivia fue el último en lograrlo en diciembre de 2008.

5. La periodista y activista canadiense Naomi Klein, quien vivió seis meses en ese país en 2002, resalta el valor simbólico de la victoria conquistada por el ex presidente: "Creo que la postura de Kirchner fue importante para el debilitamiento del FMI. Ahora el FMI está en una profunda crisis y Argentina desempeñó un papel significativo en ello. Dicho esto, no creo que los Kirchner realmente rechacen muchos postulados del neoliberalismo: pagaron al FMI, y la cuestión crucial es la redistribución de la riqueza". Véase la entrevista de Naomi Klein a Ivana Costa, "El capitalismo del desastre", *Clarín (Revista N)*, 26 de abril de 2008.

6. Véase Hedelberto López Blanch, "La integración latinoamericana por los caminos del ALBA", *Rebelión*, Madrid, 2 de junio de 2008, disponible en <www.rebelion.org>.

Atilio Boron (2007b), Boaventura de Sousa Santos (2008b) y Michael Löwy (2007), con diferencias menores en sus enfoques, identifican en Chávez-Morales-Correa una concepción similar de Estado ético político, que configura un eje de poder nacionalista, antineoliberal y de izquierda. Boron define que ser de izquierda hoy en América Latina es "estar comprometido con la crítica radical hacia el capitalismo y, en la medida de las posibilidades de cada uno, estar involucrado con el desmantelamiento de este tipo de sociedad que reproduce y perpetúa desigualdades e injusticias".

La perspectiva de Boron dialoga con la ya clásica distinción entre izquierda y derecha que propone Norberto Bobbio (1995: 55): "Es de izquierda quien defiende la igualdad, quien lucha por una distribución de ingresos más igualitaria, por una mayor justicia social. Y es de derecha quien no prioriza ese objetivo". Por lo tanto, para Bobbio, el "sentimiento de insatisfacción y de sufrimiento ante las iniquidades de la sociedad contemporánea" es el criterio decisivo que se completa en la actitud asumida frente al conflicto entre igualdad y desigualdad: "El igualitario parte de la convicción de que la mayor parte de las desigualdades que le indignan, y que le encantaría hacer que desaparecieran, son sociales y, mientras así lo sean, eliminables; el no igualitario, al contrario, parte de la convicción opuesta, de que las desigualdades son naturales y, mientras así lo sean, no eliminables" (ibíd.: 105).

El segundo bloque de gobiernos (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, este último hasta el término del mandato de Michelle Bachelet en marzo de 2010) fluctúa entre la defensa de la inclusión social y políticas económicas que, con variaciones, atienden las razones de los mercados y postergan la reversión estructural de la pobreza. No escapan así de ambigüedades y contradicciones más acentuadas y complejas.

En Brasil, Lula mantuvo los principales lineamientos de la política económica neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, adoptó programas asistenciales como el Bolsa Familia (para poblaciones con bajo ingreso en regiones periféricas) y logró ampliar el patrón de consumo a través del aumento del crédito y de la recomposición parcial del poder de compra. Hubo un expresivo crecimiento en los niveles de empleo e ingresos, aunque la carga tributaria se haya mantenido como una de las más altas del mundo. La política de altos intereses del Banco Central propició ganancias récords a los bancos y al mercado financiero. En la otra cara de la moneda, sin transformaciones estructurales, las desigualdades persistieron. Estudios hechos por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) revelan que el 10% de mayores ingresos concentra el 75,4% de la riqueza del país; el 10% de más pobre compromete el 33% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 10% de más rico solo paga el 23%.<sup>7</sup>

7. Véanse los estudios del Ipea en <www.ipea.gov.br>. Además, véase Renato Godoy de Toledo, "Educação, saúde e investimentos não chegam à metade dos gastos com juros", *Brasil de Fato*, San Pablo, 20 a 26 de noviembre de 2008.

Lula y Tabaré Vázquez mantuvieron buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Vale recordar las recepciones de ambos al presidente de aquel entonces, George W. Bush, en su gira por América Latina en marzo de 2007, ocasión en la que Vázquez firmó con Bush el acuerdo bilateral de protección a la inversión y cláusulas de propiedad intelectual. El actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, elogió a Lula y su política económica de modo categórico: "Ese es el tipo." El mandatario brasileño solo se distanció de Washington cuando su propia política externa eligió como buenos vecinos a los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales (apoyando el ingreso de Venezuela al Mercosur y cofinanciando proyectos de infraestructura en Bolivia).

Michelle Bachelet intentó amortiguar la crisis en Chile con programas sociales, y la reforma del régimen de jubilaciones para atenuar las pérdidas sufridas por los trabajadores durante y después de la dictadura de Pinochet. Con todo, Bachelet cumplió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no alteró el modelo neoliberal que hizo de Chile uno de los países con mayor desigualdad del continente. Daniel Ortega se aproximó políticamente a Chávez-Morales-Correa y ha defendido posiciones antineoliberales y antiimperialistas. Sin embargo, segmentos de izquierda nicaragüense lo han criticado por no haber roto con la política heredada de su antecesor.

Con Néstor y Cristina Kirchner, la economía argentina volvió a crecer y mejoraron los indicadores sociales; se reestatizaron los correos, la empresa de agua, los ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas; se estatizó el sistema de aportes jubilatorios privado (AFJP); la política de derechos humanos impulsó acciones judiciales que terminaron en la condena de jefes militares responsables por asesinatos y torturas durante la dictadura (1976-1983). Sin embargo, los Kirchner fueron cuestionados por una parte de la izquierda que considera que sus métodos políticos son populistas, que está en desacuerdo con la política económica, y entiende que no representa una ruptura estructural en relación con el modelo neoliberal. En relación al bloque de gobiernos "moderadamente antineoliberales", Emir Sader (2010) observa que no existe para ellos la idea de oponerse al imperialismo y al capitalismo, porque no se definen como anticapitalistas. Sader señala tres temas pendientes en las agendas de estos gobiernos: la hegemonía del capital financiero, el modelo de agrogocio y la democratización de los medios de comunicación. La forma de enfrentarlos determinará si podrán o no convertirse en alternativas estructurales al neoliberalismo, o si proseguirán con reformas limitadas.

Al examinar el cuadro latinoamericano en su totalidad, Boaventura de Sousa Santos destaca el surgimiento de una lógica alternativa al Estado capitalista neoliberal, con mayor sensibilidad frente a las cuestiones sociales. Él advierte la necesidad de que no se fracture en este momento el campo progresista en función de las distintas intensidades en el ritmo de los cambios:

Estados Unidos quiere dividir a los países latinoamericanos entre sí. Hasta ahora no lo lograron. Hay diferencias reconocidas entre los gobiernos, pero se mantienen unidos, porque comparten intereses estratégicos comunes, principalmente en lo que concierne a una nueva idea de soberanía. Las multinacionales no pueden seguir saqueando el continente. No se está en contra del desarrollo, solo que varios países entienden que tiene que darse sobre bases más justas, y no en las condiciones impuestas por las multinacionales.<sup>8</sup>

También hay dificultades para la transición hacia otros modelos de Estado, de acuerdo con Álvaro García Linera (2009), vicepresidente de Bolivia: "El proceso tiene sus pausas, sus radicalizaciones, sus pequeños retrocesos y, en otros lugares, sus parálisis. Pero ni el Banco Mundial ni el FMI salen a levantar las banderas de un neoliberalismo imbatible y redentor de la sociedad". Según García Linera, mejor están aquellos gobiernos que buscan acelerar la universalización de los derechos de la ciudadanía. El problema es que las élites están siempre dispuestas a impedir modelos inclusivos de desarrollo. Las acciones de desestabilización en Venezuela (2002), Bolivia (2008) y Ecuador (2010) tenían un objetivo común: debilitar los gobiernos de Chávez, Morales y Correa, generando tensiones capaces de dificultar las reglamentaciones de puntos decisivos de las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador, principalmente los dispositivos antimonopólicos y nacionalizantes (incluidos los que modifican los sistemas de comunicación). Las marchas populares en defensa de los mandatos presidenciales evidenciaron que la correlación de fuerzas favorecía el lado progresista. Sin embargo, las contiendas resaltaron la exigencia de alianzas internas y externas duraderas, así como formas de cooperación y articulación con movimientos sociales, en defensa de la emancipación y las soberanías nacionales.

Los avances alcanzados no terminan con el drama de sociedades estratificadas y empobrecidas, y no es posible que suceda en un corto espacio de tiempo, más aún en una región tan castigada por desequilibrios y abismos sociales. No obstante, Boaventura señala indicios promisorios: "La emergencia de una solidaridad regional, con mayor apertura y tolerancia a las diferencias políticas" y los esfuerzos gubernamentales para dar a las políticas públicas mayor alcance de inclusión socioeconómica, política y cultural, y de universalización de los derechos de la ciudadanía, rompiendo de esa forma con tantos años de indiferencia del Estado frente a la reproducción de las desigualdades.<sup>9</sup>

8. Véase la entrevista de Boaventura de Sousa Santos a *Red con Voz*, 3 de junio de 2008, disponible en <[www.redconvoz.org](http://www.redconvoz.org)>.

9. *Ibid.*

## Capítulo 2

### La concentración monopólica de los medios y sus implicancias

Para evaluar la importancia de la reorganización de los sectores de información y cultura en patrones más pluralistas, es fundamental explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina. Las últimas décadas realizaron el rasgo histórico de concentración de una parte considerable de la producción y de la difusión de datos, sonidos e imágenes en manos de un reducido número de megagrupos.

El marco de concentración prospera en medio de la convergencia de sistemas digitales de producción, transmisión y recepción. La digitalización permitió el crecimiento exponencial de la oferta de canales, productos, servicios y contenidos, ampliando los patrones de acumulación de capital, medios y tecnologías, así como la atracción de suscriptores, usuarios, capitales publicitarios, marcas, *sponsors*, inversores y servicios abonados.

Se acentúa la plusvalía en infotelecomunicaciones (palabra que reúne los prefijos de los sectores convergentes: informática, telecomunicaciones y comunicación mediática), con el uso de un mismo producto en diferentes plataformas y soportes tecnológicos. Sin contar con las alteraciones en los patrones de consumo, interacción, sociabilidad y respuesta frente a la competencia de los medios no enfocados en la televisión (Internet, celulares, juegos electrónicos), de la fragmentación de las audiencias (masivas, segmentadas, temáticas), de la globalización de mercados de contenidos audiovisuales y de la transición tecnológica hacia la televisión digital (Zallo, 2010).

Los enfoques de las políticas de comercialización son la disminución de los costos industriales y las enormes ganancias de productividad con economías de escala. Muchas veces los beneficios son reaplicados en otras acti-



vidades con el objetivo de terminar poco a poco con antiguas supremacías y, cuando sea posible, instaurar nuevos monopolios. Podemos hacer referencia a dos ejemplos con altísimas ganancias en infotelecomunicaciones en América Latina: los grupos Telefónica de España y Telmex (del magnate mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo en 2010, de acuerdo con la revista *Forbes*).

Gracias al perfeccionamiento de las tecnologías con comando a distancia, las organizaciones interconectan sus inversiones bajo la protección de una particular racionalidad empresarial. Ya no se exige la cercanía entre los lugares de producción y consumo. Al contrario, hay una íntima relación entre la desterritorialización de la producción y la velocidad circulatoria del capital. Las corporaciones implementan políticas de producción, comercialización y marketing, impregnándose de ciertas particularidades socioculturales de los países en los que actúan. Para una adaptación mercadológica sólida, se valen de alianzas con socios y proveedores locales. El desafío consiste en adaptar los objetivos del mercado a través de diseños específicos para cada área, ya sea para consolidar la impresión de que los productos navegan por sobre las particularidades geoculturales, ya sea para añadir demandas y preferencias locales, desde que eso aumenta la predisposición hacia el consumo y la audiencia.

De esa forma, el ciclo de concentración del monopolio está intrínsecamente asociado a la diversificación productiva apoyada en tecnologías de punta y a la capacidad de innovar en plazos muy cortos. David Harvey (2005a: 128-129) subraya el énfasis permanente del capitalismo en la obtención del "resultado monopolístico", que implica el control de la particularidad, de la exclusividad y de las cualidades de un determinado objeto, de manera de garantizar ingresos permanentes y ampliados. Para preservar poderes monopolísticos, las corporaciones recurren a dos estrategias principales: amplían la centralización del capital, con el propósito de obtener economías de escala y liderazgo en el mercado por medio del poder financiero; y buscan proteger sus ventajas tecnológicas por medio de derechos de registro, leyes de licenciamiento y derechos de propiedad intelectual (Harvey, 2004: 85).

Significa concentrar prácticamente en las mismas manos todas las etapas y consecuencias rentables de los procesos tecnoproductivos, con vistas a garantizar el mayor dominio posible sobre la cadena de fabricación, procesamiento y distribución de los productos y servicios. Con eso, a las pequeñas y medianas empresas las quedan nichos de mercado o suministro de insumos y servicios especializados, siempre que sea ventajoso para las grandes compañías tercerizar la producción o adquirir ítems cuya fabricación sería onerosa. Con este patrón, la competencia efectiva se limita a un número restringido de súper empresas que imponen barreras al ingreso de nuevos competidores.

La competencia desigual refuerza las asimetrías entre los centros hegemónicos (de los cuales las megaempresas son exponentes) y las periferias, que caracterizan las formas de desarrollo del modo de producción capitalista. Samir Amin (2005: 87-89) observa que las asimetrías se constituyen a partir de cinco monopolios que benefician a los centros de poder y alrededor de los cuales se articulan la eficacia de sus acciones:

- 1) los monopolios en el ámbito de la tecnología;
- 2) los monopolios en el control de flujos financieros de envergadura mundial;
- 3) los monopolios en el acceso a los recursos naturales del planeta;
- 4) los monopolios de la palabra y de la opinión en los medios, que Amín considera uno de los más eficientes para la dominación capitalista;
- 5) los monopolios en la esfera de los armamentos de destrucción masiva.

Más allá de influir en la conformación del imaginario social, los medios monopolísticos realizan un doble papel estratégico en la reproducción ampliada del capital. El primero concierne a su condición peculiar de agentes retóricos que legitiman las ideas capitalistas y las transforman en el discurso social hegemónico, difundiendo miradas del mundo y modos de vida que trasladan al mercado la regulación de las demandas colectivas —como si no fuera absurda la pretensión de reservar al mercado el poder de sintetizar las creencias y las aspiraciones humanas, ignorando o subestimando identidades, tradiciones y anhelos de los pueblos. El segundo papel asumido por los grupos mediáticos es el de agentes económicos prominentes en los mercados mundiales donde venden sus propios productos e intensifican la visibilidad de sus anunciantes y patrocinadores, a partir de su capacidad de irradiación por los cuatro cuadrantes. Estos grupos figuran entre las 300 más grandes empresas no financieras del mundo (McChesney, 2005: 174).

En función de la recesión económica post-2008 en Europa y Estados Unidos, las corporaciones transnacionales incrementaron la carrera por lucros compensatorios en Latinoamérica. La región se convirtió en uno de los mercados más codiciados, sobre todo para el despliegue de productos multimedia y servicios de infotelecomunicaciones. El amplio potencial de consumo, el español como segundo idioma de la globalización, la carencia de tecnologías avanzadas y la ausencia de legislaciones antimonopolísticas fueron la razón para que las corporaciones, principalmente las norteamericanas, incrementasen sus negocios en la región.

La consultoría Price Waterhouse Coopers proyecta, para el cuatrienio 2010-2014, un crecimiento anual promedio de un 8,8% de las industrias de entretenimiento latinoamericanas, bastante por encima del promedio global de un 5% pronosticado para el mismo período. América Latina fue la región que más se desarrolló en términos de gastos con medios de comunicación

y entretenimiento. Aun en 2009 –año de la recesión–, el aumento fue de un 3,9%, con una facturación de 50 billones de dólares. Solo en un país, Brasil, la industria global de audiovisuales facturó alrededor de 18 billones de reales, que equivalen al 1,5% de su ingreso mundial.<sup>1</sup>

La expansión de las industrias mediáticas y de entretenimiento en América Latina está vinculada históricamente a intereses privados y transnacionales, que se benefician de la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y de capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. Beneficiados por las desregulaciones y privatizaciones durante las décadas de 1980 y 1990, los megagrupos se propagaron por la región sin necesidad de someterse a mayores restricciones legales. Ellos adoptan una estrategia centrada en los mercados más seguros y rentables, provocando desequilibrios en la balanza comercial de la cultura en países latinoamericanos, sobre todo en aquellos con industrias culturales parcialmente fortalecidas (Brasil, México y Argentina) o en situación intermedia (Chile, Perú y Colombia).

La transnacionalización cultural genera una serie de efectos colaterales, empezando por la ocupación oligopolizada y por la desnacionalización de industrias de entretenimiento. Las corporaciones establecen parámetros y sistemas de producción, distribución, difusión y circulación de contenidos para aumentar las bases consumidoras en plazas internacionales. Entre los sistemas que apuntan a dividendos competitivos e incremento de beneficios, Bernard Miège (2010: 179) resalta:

cronometraje de series televisivas, películas o pistas de música popular, remodelación de normas de espectáculos deportivos teniendo en cuenta su retransmisión televisiva, fragmentación de la información en segmentos que conciernen a las prácticas usuales de los países dominantes, etc.; y consolidación de la uniformidad de las nuevas herramientas [tecnológicas].

La estrategia es oportunista porque, con frecuencia, las *majors* abandonan segmentos actualmente riesgosos en términos de rentabilidad (cine y música) para operar prioritariamente en áreas locales con lucros más inmediatos (telenovelas, series, juegos electrónicos) y en los medios masivos que atraen publicidad y *sponsors* (prensa, radio, televisión). Además, se alían a grupos regionales y globales que les ofrecen logísticas sólidas, financiamiento asegurado e inserción en el mercado –todo esto sin grandes preocupaciones por la diversidad cultural y la integración regional (Bustamante, 2009: 79-80).

En la escalada de la internacionalización, corporaciones transnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony

1. Véase Mariana Barbosa, "América Latina lidera expansão em entretenimento", *Folha de S. Paulo*, 15 de junio de 2010. Y también la entrevista del entonces presidente de Ancine, Manoel Rangel Neto, a Miriam Aquino, *Tele.Síntese*, 18 de julio de 2008.

y Prisa adquirieron activos de medios y/o consolidaron acuerdos con grupos multimédios regionales, ampliando muy pronto sus actuaciones multisectoriales y los mercados para sus productos y servicios.

Hace décadas que la mayoría de estos grupos mediáticos regionales pertenece a dinastías familiares. Entre las familias que controlan los medios de comunicación están Marinho, Civita, Frias, Mesquita, Sirotsky, Saad, Abravanel, Sarney, Magalhães y Collor (Brasil); Cisneros y Zuloaga (Venezuela), Noble, Saguier, Mitre, Fontevecchia y Vigil (Argentina); Slim y Azcárraga (México); Edwards, Claro y Mosciatti (Chile); Rivero, Monastérios, Daher, Carrasco, Dueri y Tapia (Bolivia); Ardila Lulle, Santo Domingo y Santos (Colombia); Verci y Zuccolillo (Paraguay); Chamorro y Sacasa (Nicaragua); Arias y González Revilla (Panamá); Picado Cozza (Costa Rica); Ezerski, Dutriz y Altamirano (El Salvador); Marroquín (Guatemala), y Canahuati, Roshental, Sikaffy, Willeda Toledo y Ferrari (Honduras). Además, se dan casos de multiplicación de familias propietarias dentro de un mismo país. En Ecuador, 19 familias controlan 298 de las 348 frecuencias de televisión abierta. Y 45 familias mantienen el dominio de un 60% de las 1.196 concesiones de radio AM y FM.<sup>2</sup>

Las directrices de regionalización se hicieron evidentes en colecciones de adquisiciones, fusiones, repartos accionarios y acuerdos operacionales. Se destacan las asociaciones y *joint ventures*. Al optar por estrategias de colaboración, las corporaciones apuntan a aumentar sus ganancias, ya sea reduciendo gastos y pérdidas, ya sea eludiendo factores de riesgo –en especial los que provienen de la inestabilidad económica y de la restricción en la vida útil de las mercaderías. Los proyectos exigen aportes financieros y logística adecuada, a fin de facilitar el drenaje hacia las plazas extranjeras.

En América Latina se desnacionalizaron varias ramas culturales. Brasil y Argentina, los dos principales mercados editoriales, están, mayoritariamente, en manos de grupos transnacionales (como por ejemplo las españolas Prisa/Santillana y Planeta, y la británica Pearson), y forman parte de un circuito transnacionalizado que abarca complejas operaciones de planeamiento estratégico, comercialización, distribución y marketing. Las *majors* dominan las cadenas de distribución y exhibición cinematográficas, con supremacía de estrenos de películas extranjeras. Las producciones nacionales retienen apenas un 10% de las boleterías en Brasil y un 9% en Argentina, mientras que las norteamericanas responden, respectivamente,

2. Véase Diego Olivera, "El control de los medios de comunicación por monopolios empresariales", *Rebelión*, Madrid, 14 de junio de 2007, disponible *on line* en <[www.rebellion.org](http://www.rebellion.org)>. Véase también Eduardo Tamayo G., "Nueva Constitución: avances y desafíos en materia de comunicación", *Foro Ecuatoriano de la Comunicación*, Quito, 22 de octubre de 2008, disponible en <[www.forocomecuatorior.blogspot.com](http://www.forocomecuatorior.blogspot.com)>.

por un 79,4% y un 82,1%.<sup>3</sup> El mercado fonográfico presenta desequilibrios similares. Las productoras independientes de Brasil producen un 70% de la música nacional, sin embargo, logran solo un 8% de espacio de difusión en las emisoras de radio y televisión. A la vez, las majors graban apenas un 9% de repertorio nacional y, no obstante, se quedan con un 90% de los espacios de publicidad (Almeida, 2008a).

Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se ratificó el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, lo que facilitó la entrada de capitales externos en empresas de medios de comunicación argentinas, con algunas restricciones en medios audiovisuales y sin límites para las telecomunicaciones.<sup>4</sup> En México, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, los indicadores de producción cayeron a la mitad, así como la facturación y el número de espectadores de películas nacionales. En los diez años que precedieron, se producían anualmente de 80 a 100 películas; hoy no pasan de 25 (Getino, 2003).

En Brasil, desde la reglamentación de la enmienda 36/2002 por la Ley 10.610, de diciembre de 2002, el capital extranjero está autorizado a adquirir hasta un 30% de las acciones de las empresas periodísticas y de radiodifusión. Las normativas que rigen la televisión contratada por vía satélite no establecen restricciones para el capital extranjero. A su vez, la ley de televisión por cable permite la entrada de capital externo hasta un 49%. Sin embargo, en los casos de Net y de TVA, que pertenecían a los grupos Globo y Abril, respectivamente, las corporaciones transnacionales Telmex y Telefónica de España lograron gambetear la legislación brasileña para asumir el control accionista.<sup>5</sup> En la última década, Globo y Abril perdieron su protagonismo en este mercado para corporaciones globales –mientras que Globo disminuyó su participación en Net y Sky, Abril vendió sus acciones en DirecTV y en TVA. Aunque ya no figure en posición mayoritaria en las dos más grandes empresas de televisión por cable del país –Net y Sky–, Globo mantiene su poder de veto y monopolio del contenido brasileño exhibido en las dos operadoras, que juntas controlan un 75% del mercado.<sup>6</sup>

3. *Tela Viva*, 1<sup>o</sup> de febrero de 2008. Sobre el mercado cinematográfico en Argentina, véase *La Nación*, 30 de enero de 2007.

4. Sobre la concentración e internacionalización de los medios de comunicación en Argentina, véase Luis Pablo Giniger, "Legislación y concentración mediática en la Argentina", *Revista del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini*, Buenos Aires, n° 1, septiembre de 2007.

5. Gustavo Gindre, "Multinacionais burlam legislação para entrar na TV paga", *Observatório do Direito à Comunicação*, 15 de noviembre de 2007, disponible en <[www.vermelho.org.br](http://www.vermelho.org.br)>.

6. Hughes Eletrônica amplió su participación en DirecTV comprando las acciones de TVA en 1999, manteniendo como socio minoritario al grupo Cisneros. En 2003, News Corporation compró parte de Hughes en Estados Unidos y pasó a controlar DirecTV. Esta operación tuvo ecos en Brasil con la fusión de las operadoras Sky (controlada por la alianza News/Globo) y DirecTV (que pasó a ser controlada por la News), concluida en 2006. En la fusión, prevaleció la marca Sky, perteneciente a los grupos DirecTV (representando a News y controlando aproximadamente el 74%) y Globo Comunicaciones y Participaciones (con aproximadamente el 26%). En febrero de 2008, la Federal

Las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América Latina (Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela; Clarín de Argentina) retienen el 60% de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de esta forma: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de las ganancias de la televisión abierta y el 23,2% de la televisión por cable; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, el 56% de la televisión abierta y un 44% de la televisión paga; Televisa y TV Azteca forman un duopolio que acumula el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente (Becerra y Mastrini, 2009a).

Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y de las emisoras de radio y televisión, y el 75% de las salas de cine de la región (Ruiz, 2007). Los indicadores de concentración de los medios en Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay están entre los más altos del mundo: apenas cuatro grupos privados dominan, respectivamente, el 95, 92, 86 y 85% de los mercados (Becerra y Mastrini, 2009a).

En Brasil, la concentración de la televisión abierta es aguda. He aquí lo que consta en el informe divulgado por la Article 19, organización no gubernamental volcada a la libertad de expresión:

Seis empresas mediáticas controlan el mercado de televisión en Brasil, un mercado que mueve más de 3 billones de dólares anuales. La red Globo detenta cerca de la mitad de este mercado, totalizando 1,59 billones de dólares. Estas seis empresas mediáticas controlan, en conjunto, 138 de los 668 medios de transmisión existentes (televisoras, radios y periódicos) y un 92% de la audiencia televisiva. Globo captura el 56% de la audiencia de TV.

La estadística hecha por el proyecto Dueños de los Medios nos muestra que de los 2.385 medios conectados a una de las 55 redes nacionales de radio y TV de Brasil, un 39% (934) posee relación con las cinco más grandes redes privadas de televisión –Globo, SBT, Record, Band o Rede TV–. Están vinculados a Globo 340 medios, entre canales de radio, televisión, periódicos y revistas. Luego están SBT, con 194 emisoras afiliadas; Band, con 166; Record, con 150, y Rede TV, con 84.<sup>7</sup>

Este fenómeno se repite en Argentina, donde siete grupos (Clarín, Admira-Telefónica, América Multimedios, HMT&F, Hadad, Uno-Vila/Manzano y La Nación) controlan o tienen participación accionista en cerca de 200 medios. El gobierno de Menem hizo una modificación que permitió a los propietarios de periódicos adquirir medios audiovisuales, logrando, por ejemplo, que Clarín se convirtiera en una corporación multimedios. En el

Communications Commission (FCC) aprobó una operación involucrando la venta de las acciones de DirecTV por News Corporation al grupo Liberty Media, del magnate John Malone.

7. El informe del artículo 19 está disponible en <[www.article19.org](http://www.article19.org)>. Véase Milton Júnior, "Cinco redes de comunicação reúnem 39% dos veículos", *Contas Abertas*, 18 de diciembre de 2008, disponible en <[www.fndc.org.br](http://www.fndc.org.br)>.

caso de la televisión abierta, Clarín, Admira-Telefónica y América controlan el 60% de las concesiones (Calcagno, 2008).

Habitualmente, en todas las áreas donde actúa, el grupo Clarín tiene una posición dominante, proporcionada "por su interlocución privilegiada con los grandes anunciantes publicitarios y su acceso a las fuentes de los distintos estamentos de poder económico, político, sindical, etc." (Becerra y Mastrini, 2009a: 74). Actualmente, es uno de los más grandes oligopolios del mundo hispanohablante, con negocios en los medios de prensa, radio, televisión abierta y televisión por cable, producción audiovisual, Internet, contenidos digitalizados e industria gráfica. De acuerdo con el informe anual del grupo Clarín, la rentabilidad en 2009 fue el 16,4% mayor que la registrada en 2008, con ganancias de alrededor de 1,7 billones de dólares. Este rendimiento superó al de las Organizaciones Globo, de Brasil, que creció el 10% aunque con ingresos brutos bastante superiores a los de Clarín (5,2 billones de dólares).

Entre los efectos negativos de estos niveles récords de concentración, Martín Becerra (2010: 104) marca el alto riesgo de unificación de las líneas editoriales y la prevalencia de las ambiciones empresariales por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. E indica otras distorsiones:

La concentración vincula los negocios del espectáculo (estrellas exclusivas), de los deportes (adquisición de derechos de transmisión), de la economía en general (inclusión de entidades financieras y bancarias) y de la política (políticos transformados en magnates de los medios o en socios de grupos mediáticos) con áreas informativas, lo que genera repercusiones que alteran lo que pretende ser la "autonomía" de los medios de comunicación.

Si confrontamos el desempeño sustentable de la mayoría de los países latinoamericanos en el comercio global con lo que los gigantes de los medios recaudan en el continente, concluiremos que el grueso de las ganancias es absorbida por potencias extranjeras. Estados Unidos se queda con el 55% de las ganancias mundiales generadas por bienes culturales y comunicacionales; la Unión Europea, con el 25%; Japón y Asia, con el 15%, y América Latina, con solo el 5% (Canclini, 2002: 55). De esa forma se entiende por qué la industria del entretenimiento fue la que más creció en los años noventa en Estados Unidos, representando el 6% del PBI. Los productos audiovisuales ya son la segunda mayor fuente de exportaciones.<sup>8</sup>

Los desajustes socioeconómicos y tecnológicos se extienden hacia Internet. Mientras Estados Unidos y Europa concentran el 67% de los usuarios, Latinoamérica, que reúne el 8% de la población mundial y contribuye con 7% del PBI global, cuenta con poco más del 4% del total de internautas. Aunque

8. Consultese al documento "Los años 90 y el nuevo escenario post-devaluación", publicado por el *Observatorio de Políticas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires*, Argentina, disponible en <www.buenosaires.gov.ar>.

el acceso a Internet está creciendo semestralmente a una tasa promedio del 25%, solo 85 de los 560 millones de latinoamericanos estuvieron conectados en el primer trimestre de 2008.<sup>9</sup> Mientras en Finlandia, más del 60% de los habitantes disponen de Internet (y de cada 100 usuarios, 70 acceden por banda ancha), en Nicaragua, el 2,7% de la población está conectada, lo mismo ocurre con el 2,1% en Cuba, el 3,9% en Paraguay, el 4,6% en Honduras y el 6,4% en Bolivia.<sup>10</sup> De acuerdo con el mapa de las Desigualdades Digitales, en Brasil apenas el 2% de la población más pobre puede acceder a Internet, y el 10% más rico disfruta hasta cinco veces más de los beneficios de la red que el 40% más pobre de la población.<sup>11</sup>

La superioridad de los países desarrollados se enfrenta a las inversiones insuficientes de los gobiernos latinoamericanos en tecnología y producción cultural, responsables por la baja competitividad externa de los bienes y servicios producidos en la región. Por otro lado, grupos transnacionales ocupan vorazmente los vacíos favorecidos por legislaciones débiles. El lastre financiero, la capacidad logística, la infraestructura tecnológica, el control de innovaciones y patentes, y la economía de escala les otorgan ventajas competitivas incomparables, ya que empresas nacionales de menor porte no presentan recursos ni soportes para gestionar inversiones sustanciales (López y Amaya, 2004). De igual modo que el déficit en inversiones sectoriales, políticas públicas inadecuadas o inconsistentes y la inercia regulatoria alejaron al Estado, en los últimos decenios, de cualquier protagonismo en las áreas de información y entretenimiento. Por consiguiente, existen factores tanto en la esfera pública como en la privada que contribuyen, en mayor o menor grado, pero no por esto menos sustanciales, con la transnacionalización y la concentración monopólica. Lo que nos lleva a coincidir con Néstor García Canclini (2010: 95) cuando evalúa que

la desigualdad en la producción, en la distribución y en el acceso a los bienes culturales no se explica como simple imperialismo o colonialismo cultural (aunque subsisten estos comportamientos), sino por la combinación de procesos expansivos, ejercicios de dominación y discriminación, inercias nacionalistas y políticas culturales incapaces de actuar en la nueva lógica de los intercambios.

Serías discrepancias prosperan en el acceso a bienes y servicios culturales en Brasil. Una investigación encargada por el Ministerio de la Cultura al

9. Reuters, 28 de marzo de 2008.

10. Véase Ethevaldo Siqueira, "Televisão na Finlândia já é 100% digital", *O Estado de S. Paulo*, 25 de mayo de 2008. Las estadísticas sobre la penetración de Internet en América Latina están disponibles en <www.internetworldstats.com>.

11. El Mapa de las Desigualdades Digitales resultó de la asociación entre el Ministerio de Educación, el Instituto Sangari y la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA). Véase Juliana Anselmo da Rocha, "Mapeada exclusão digital no Brasil", *Jornal do Brasil*, 7 de agosto de 2007.

IPEA y al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) revela que más del 90% de los municipios no poseen salas de cine, teatros, museos o centros culturales. Apenas el 5% de la población concurre al cine de forma regular; el 93,4% jamás estuvo en una exposición de arte, y 600 municipios no disponen de una biblioteca.<sup>12</sup> Existe una sala de cine cada 84.000 habitantes, mientras que en México la proporción es de una cada 30.000 y en Argentina, de una cada 34.000. Con relación a Estados Unidos, donde hay una sala cada 8.000 habitantes, los datos se distancian aún más.<sup>13</sup>

Entre los impactos más graves en la economía de la comunicación, podemos señalar las políticas depredatorias en los precios, destinadas a eliminar o limitar estrictamente la competencia, y los controles oligopólicos sobre producción, distribución y difusión de los contenidos. Por no mencionar que, en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos intenta siempre impedir proteccionismos en las industrias audiovisuales (en forma de subsidios y fomentos), para beneficiar los negocios de sus corporaciones. El resultado es que el 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de aquel país. Mensualmente, 150.000 horas de películas, series y eventos deportivos norteamericanos son programados en las emisoras de televisión latinoamericanas. ¿Cómo imaginar un intercambio igualitario si Hollywood produce el 77% de la programación televisiva de América Latina? Las conveniencias corporativas frecuentemente se superponen a las tradiciones e identidades, toda vez que persiguen estrategias de maximización de ganancias, sin manifestar mayor interés por la formación educativa y cultural de los espectadores, menos aún por el pluralismo en las programaciones.

12. La investigación sobre hábitos culturales en Brasil está disponible en <www.cultura.gov.br>.

13. Entrevista del presidente de Ancine, Manoel Rangel Neto, a Miriam Aquino, *Tele. Síntese*, 18 de julio de 2008.

### Capítulo 3

## El valor estratégico de las políticas públicas de comunicación

En una época de mercantilización generalizada, economías globalizadas y digitalización, se vuelve estratégico el papel de los sistemas de comunicación en la vida socioeconómica y política, tanto para la consolidación o la reversión de consensos como también para la soberanía nacional, el desarrollo cultural, la integración regional y la cooperación internacional.

Cuando me refiero a la formación de consenso, tengo en mente el concepto de hegemonía propuesto por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (2002c: 65). De acuerdo con sus ideas, la hegemonía presupone la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político-ideológico por una clase o bloque de clases que se impone sobre las otras. Involucra la capacidad de un determinado bloque de articular un conjunto de factores que lo habilite a dirigir moral y culturalmente, y de modo sostenido, la sociedad como un todo. La hegemonía es obtenida y consolidada no solo por cuestiones vinculadas a la estructura económica y la organización política, sino también, en el plano ético-cultural, a la expresión de saberes, prácticas, modos de representación, juicios de valor y modelos de autoridad que quieren legitimarse y universalizarse.

La hegemonía se convierte en la capacidad de

generalizar una mirada del mundo, capacidad que se nutre tanto de la pertenencia argumentativa del discurso y de su similitud con las expresiones visibles de la realidad (o su capacidad para visualizar las expresiones ocultas), como de las manifestaciones de fuerza que provienen de las condiciones objetivas en las cuales tienen lugar las relaciones sociales (Ceceña, 2005: 36-37).

Por lo tanto, la hegemonía no debe ser meramente entendida en los límites de una coerción pura y simple, puesto que incluye la dirección cultural y la aquiescencia social hacia un universo de convicciones, normas morales y reglas de conducta, además de la superación de otras creencias y sentimientos. Se torna indispensable definir estrategias de argumentación y persuasión, como también acciones concatenadas que resulten en discursos reiterados como verdades irrefutables e interpretaciones convincentes sobre el cuadro social.

Es importante destacar el hecho de que la hegemonía no es una construcción monolítica, sino el resultado de mediaciones de fuerzas entre los bloques de clases en determinado contexto histórico, traduciendo formas variables de conservación o reversión del dominio material e inmaterial. Puede ser reelaborada y alterada, en un largo proceso de acciones concatenadas, resistencias y victorias acumulativas, tanto en el ámbito de la sociedad civil (a través de asociaciones y movimientos contra-hegemónicos) como en el seno de la sociedad política (o del Estado en sentido restringido).

La batalla simbólica por la democratización de la comunicación necesita cuestionar las verdades discursivas que los medios, como aparato privado de hegemonía, elaboran, diseminan y ambicionan perpetuar. La pluralización depende de varios factores, entre ellos el convencimiento público sobre la necesidad de espacios más libres de información y opinión, y la implementación de políticas públicas que promuevan una efectiva diversificación de los contenidos.

Desde el punto de vista conceptual, el estudio de las políticas de comunicación involucra el análisis de las iniciativas en lo concerniente al amplio conjunto de actividades de información, comunicación y cultura. "Estas iniciativas postulan metas que se persiguen. Como consecuencia, necesitan disponer de recursos y medios con los cuales puedan cambiar una situación y generar resultados en un período de tiempo determinado" (Becerra, 2010: 83).

Los marcos modernos de las políticas de comunicación se relacionan con los objetos nacionales perseguidos por los Estados a lo largo de los siglos XIX y XX, como respuesta a la renovación continua de las tecnologías. El papel del Estado fue esencial en el desarrollo del telégrafo, de las telecomunicaciones, del cine, de la radio y de la televisión. A medida que estas industrias se fueron consolidando, la actuación estatal se volvió determinante para la configuración de derechos, reglamentaciones y restricciones.

En función de la correlación de fuerzas vigente en cada coyuntura específica, las políticas oscilaron y oscilan entre la defensa del interés público y las exigencias de rentabilidad de las empresas privadas. No obstante este movimiento pendular entre los valores sociales y las ambiciones mercantiles, históricamente es en nombre del interés nacional que se reconoce y se legitima la intervención del Estado para ordenar y armonizar los mercados constitui-

dos por nuevos medios de comunicación y redes de distribución de contenidos. Esa intervención en general abarca la fijación de normas, estrategias y prácticas de organización, regulación, gestión, financiamiento, formulación de planes y condiciones competitivas. Se trata de reconocer al Estado como instancia capaz de resguardar el interés colectivo en los procesos, prácticas y dinámicas comunicacionales, en comparación con los designios del mercado y sus engranajes de gestión, reproducción y comercialización.

Uno de los marcos de las discusiones sobre políticas de comunicación fue el célebre Informe McBride, titulado "Un mundo y muchas voces", que fue el resultado de iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a fines de la década de 1960 para intentar revertir el desequilibrio de los flujos internacionales de información y construir la llamada "Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación" (NOMIC). Un paso adelante en esta dirección fue la aprobación, en la Conferencia General de la Unesco, realizada en noviembre de 1978 en París, de la "Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación masivos para el fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional para la promoción de los derechos humanos y la lucha en contra del racismo, el apartheid y la incitación a la guerra". En 1980, el Informe McBride reconoció la existencia de un grave desequilibrio en el flujo mundial de información y comunicaciones, y promovió la discusión de alternativas que pudieran revertir la situación. Su publicación estimuló una serie de conferencias regionales, incluso en Latinoamérica, sobre políticas culturales y comunicacionales, patrocinadas por la Unesco. Sin embargo, la correlación de fuerzas favorable a las razones del mercado hizo inviables los cambios indicados por el Informe, como considera Venício A. de Lima (2008):

No es necesario recordar que el Informe y la Unesco enfrentaron una muy fuerte oposición por parte de los grupos globales de los medios y de los países hegemónicos. En el pico de la onda neoliberal, en clima de "guerra fría" y bajo el liderazgo de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se puso en marcha una ofensiva mundial en favor del "libre flujo de la información", bandera con "poder de fuego" equivalente al principio de libertad de prensa. Aun a riesgo de simplificar demasiado, la batalla fue "ganada" cuando tanto Estados Unidos (1984) como Inglaterra (1985), alegando la politización del debate, se desconectaron de la Unesco. A partir de ahí, el apoyo de la propia Unesco hacia NOMIC fue disminuyendo progresivamente, y la discusión institucionalizada del desequilibrio en el flujo de informaciones Norte-Sur fue oficialmente moviéndose hacia el ámbito del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), más tarde transformado en OMC (Organización Mundial de Comercio). Aun así, fue el debate iniciado en la Unesco el que llevó a impulsar la discusión sobre los desequilibrios del flujo de información y comunicación también a nivel regional, nacional y local.

A partir de 1980, en el cuadro de globalización capitalista e internacionalización de los mercados, las políticas neoliberales de desregulación, desestatización y privatización debilitaron la interferencia del Estado en áreas estratégicas y en la promoción de políticas sociales. El discurso dominante pasó a rotular como "intromisión indebida" del Estado la formulación de directrices para la expansión de las tecnologías de conexión y transmisión (satélite, cable, redes infoelectrónicas), bajo la justificación de que correspondía al mercado autorregularse. Con esto, las ambiciones empresariales predominan en las reglas básicas de la convergencia digital, promovida por la hibridación de las infraestructuras (redes, plataformas, sistemas) de generación de datos, imágenes y sonidos.

La adhesión de numerosos gobiernos latinoamericanos al ideario neoliberal ocasionó una serie de distorsiones. En los últimos veinte años, las políticas públicas de comunicación estuvieron orientadas, fundamentalmente, hacia lo que Guillermo Mastrini y Damián Loreti (2009: 60-61) clasifican como "re-regulación": la eliminación de restricciones a la concentración de medios. La revisión de los marcos legales fue hecha para posibilitar una "liberalización controlada", con actores privados asumiendo el control sobre las cuestiones clave que involucraban el sistema comunicacional como un todo. A continuación, las políticas se volvieron escasas e insuficientes, y los controles monopólicos se beneficiaron con legislaciones omitidas o complacientes. La privatización desenfrenada acentuó la concentración (de propiedad, de capitales, de medios tecnológicos, de dominios sectoriales) de las industrias de información y entretenimiento en manos de un reducido número de corporaciones nacionales y transnacionales, con alianzas estratégicas y asociaciones en todos los continentes.

Por consiguiente, el reflujo de las políticas públicas de comunicación en las décadas de 1980 y 1990 tuvo que ver tanto con la concentración y la transnacionalización, que se acentuaron con la "re-regulación", así como con el hecho del apartamiento deliberado por parte de los Estados de sus responsabilidades para con la modernización de las infraestructuras productivas y tecnológicas, y la acción regulatoria. Los gobiernos "dejaron en manos privadas —muchas veces transnacionales— los instrumentos clave para informar a la ciudadanía y ofrecer canales públicos para su expresión" (Canclini, 2003: 147).

Frente a las conjeturas de crisis del neoliberalismo, en el ámbito de la sociedad civil, se están retomando las reivindicaciones por una participación más activa del Estado en la reestructuración y en la regulación de actividades esenciales. Entre las cuestiones prioritarias, se destacan la concentración en la propiedad de los medios de comunicación; la convergencia entre los sectores de informática, audiovisual y telecomunicaciones, y las formas de regulación de la radiodifusión y de los flujos globales de comunicación. En el campo de las

telecomunicaciones, es relevante la decisión de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba de fundar la empresa multiestatal Grannacional de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es liberar a aquellos países de las redes de operadoras transnacionales que dominan el sector desde las privatizaciones a tambor batiente de la década de 1990.<sup>1</sup> El documento aprobado en la reunión ministerial de Alba en noviembre de 2007 en La Habana señala:

Las telecomunicaciones son un instrumento importante para impulsar el proceso de transformación social exigido por nuestros pueblos, y elementos como la comunicación, el conocimiento y la información dependen en gran medida de esta herramienta, a fin de buscar revertir el desarrollo desigual y de exclusión de nuestras sociedades.

En lo que concierne a la radiodifusión, se trata de promover medidas que aseguren una distribución equitativa entre tres instancias: el Estado (para garantizar un servicio público de calidad), el sector privado (con fines de lucro y responsabilidades sociales) y el sector social (sin fines de lucro, independiente del poder estatal y constituido por entidades y movimientos comunitarios, sociales, étnicos y de género, universidades, sindicatos, asociaciones profesionales, etc.).

La distribución equitativa demarca los campos de actuación de los actores que interfieren en los procesos comunicacionales, de modo que resulta decisiva para separar los presupuestos comerciales de los contenidos de interés social y comunitario. Igualmente, es importante para distinguir las particularidades de las esferas estatal y pública (que representa los diferentes grupos, clases e instituciones sociales).

Jesús Martín-Barbero (2008: 10) llama la atención sobre el despropósito de confundir lo estatal con lo público, despreciando la heterogeneidad que atraviesa el conjunto de la sociedad. A diferencia del estatal, que se constitu-

1. Bolivia y Venezuela reestatizaron sus empresas de telecomunicaciones. En mayo de 2007, Hugo Chávez nacionalizó CANTV, asegurando la soberanía nacional en materia de telefonía pública. La empresa responde por el 80% de la telefonía móvil, el 18% de la telefonía fija y el 20% del acceso a Internet. El programa de Venezuela para el quinquenio 2007-2012, con una inversión inicial de US\$ 1,8 billones, incluye una ley de regulación de las telecomunicaciones; la integración de las redes de fibra óptica del Estado; la colocación en órbita del Satélite Simón Bolívar; la creación de la empresa mixta de telecomunicaciones Grannacional; la instalación del cable submarino Cuba-Venezuela; el funcionamiento de la Fábrica de Celulares y el desarrollo de la televisión pública. En Bolivia, el 1º de mayo de 2008, Evo Morales anunció la nacionalización de Entel, que responde por el 60% de la telefonía. El grupo italiano Telecom, que, en sociedad con Telefónica de España, controlaba Entel desde la privatización en 2000, recurrió al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano del Banco Mundial, para fijar la indemnización. El gobierno boliviano reaccionó desautorizando al Ciadi a intervenir en la disputa con el argumento de que "lesiona la soberanía nacional y protege intereses de las corporaciones privadas". Ecuador, Argentina, Venezuela y Nicaragua también están cuestionando las decisiones del Banco Mundial en las relaciones o conflictos entre inversores y Estados.

ye por la cohesión de propósitos y consensos, el espacio público "es plural, heterogéneo, diverso y conflictivo, como la sociedad". Por consiguiente, no puede ser concebido como "el espacio de los intereses comunes; tiene que ser conflictivo porque lo común es muy distinto y responde a intereses diversos, nunca a uno solo". De ahí la importancia de una repartición equilibrada del espectro de la radiodifusión, respetando las peculiaridades de los sectores estatal y público, y no amalgamándolas como si fueran elementos solubles. Hasta puede converger en determinadas circunstancias, aunque no por atavismos o conjugaciones automáticas. Cuando los prismas de lo estatal prevalecen en detrimento de la variedad del público, se corre el peligro de que se desmovilicen las voluntades y se debiliten las prácticas transformadoras de los distintos sujetos sociales.

La necesidad de una distribución equitativa también merece ser enfatizada puesto que la radiodifusión es parte de los bienes públicos comunes, y de esta forma no puede ser monopolizada por actores privados, como si fuese de su exclusiva propiedad.

Estos [bienes públicos comunes] incluyen no solo la educación, la información, el saber y la cultura, sino también el espectro de las frecuencias de radiodifusión, la salud, el agua, el medio ambiente –todos estos dominios que deberían constituir "excepciones" a la ley del libre comercio, "cosas" a las cuales las personas y los pueblos tienen derecho, producidas y repartidas en condiciones de libertad y equidad, según la propia definición del servicio público, cualquiera que sean los estatutos de las empresas que garanticen esta misión (Mattelart, 2007).

Las principales formulaciones sobre el derecho a la comunicación surgieron en las décadas del setenta y el ochenta, en medio de las discusiones que desembocaron en la elaboración del Informe McBride. De manera implícita o explícita, desde la Cúpula de los Derechos Humanos de Viena (1993), ese derecho viene siendo mencionado o reconocido en varios documentos internacionales, como la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Declaraciones Finales de los Foros Sociales Mundiales. La expectativa de avances en la materia con las Cúpulas Mundiales de la Sociedad de la Información de Ginebra y Túnez (en 2003 y 2005), acabó frustrándose en función de los antagonismos entre valores y visiones de mundo inconciliables. Los países más industrializados, los conglomerados de medios y las empresas de telecomunicaciones defendieron una perspectiva mercadológica para la llamada "sociedad de la información", concibiendo las nuevas tecnologías de comunicación como elementos estructurantes del desarrollo económico, basados en el libre mercado global de bienes y servicios. La representación de la sociedad civil –formada por

ONG y movimientos sociales– reivindicó la democratización de la comunicación y el conocimiento, pugnando por una distribución equitativa de las tecnologías y el acceso universal a la información sin fines comerciales. Dado que no se llegó a un consenso, la sociedad civil divulgó, por separado, la Declaración de la Sociedad Civil en la Cúpula Mundial sobre la Sociedad de la Información, subrayando que el derecho a la comunicación se incluye entre los derechos humanos y tiene que ver con el papel central de las comunicaciones en la actualidad.

En los últimos años, con los frecuentes cuestionamientos a la concentración de los medios y la mercantilización de la información, el tema del derecho a la comunicación volvió a figurar dentro de la orden del día en los escenarios internacional y latinoamericano, teniéndose en cuenta la necesidad de profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Se amplía la comprensión de que es el Estado la única institución que puede salvaguardar la diversidad cultural en tanto elemento fundamental para la afirmación de la ciudadanía. En este sentido, y sin ignorar las transformaciones de la era digital y la necesidad del Estado de respetar los márgenes de autonomía (individual o colectiva) indispensables para la libre expresión creativa, crece la importancia de políticas públicas que tengan en cuenta la libertad de expresión como parte constitutiva del derecho humano a la comunicación.

Está en cuestión hacer prevalecer un conjunto de principios y prácticas que, teniendo en cuenta las complejidades y reconfiguraciones de la era digital, protejan e impulsen la diversidad, la información veraz, la producción cultural nacional, las identidades y tradiciones culturales de los pueblos, a partir del reconocimiento de su rol esencial en la vida de los individuos y de las comunidades.



## Capítulo 4

### Gobiernos progresistas y transformaciones comunicacionales

“La comunicación necesita tener un nítido sentido social y de servicio público. Por esta razón, es necesario reforzar el derecho a la información, fortalecer la pluralidad comunicacional y facilitar el acceso a la tecnología de los ciudadanos.”<sup>1</sup> La comprensión de Michelle Bachelet refleja una posición consensual entre gobiernos progresistas en cuanto a la necesidad de ampliar la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a través de actitudes articuladas que resulten en la renovación de leyes y marcos reglamentarios de las concesiones de radio y televisión; en la descentralización de los canales de transmisión; en el apoyo a producciones audiovisuales independientes; en más ecuanimidad en los accesos al conocimiento y las tecnologías; en la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.

Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa son taxativos en el rechazo al monopolio privado de los medios y su desmedida preponderancia en la vida social. “No se puede aceptar la usurpación de funciones por medios de comunicación que funcionan como partidos políticos y lo niegan, que operan como grupos de presión y lo niegan, cuyas líneas editoriales no provienen de los que trabajan en ellos, es decir, los periodistas, sino de sus propietarios, una familia o un grupo económico”, declaró Chávez en su programa radiofónico *Aló Presidente*, el 10 de mayo de 2009.<sup>2</sup> En la apertura del V Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado en mayo de

1. Discurso de Michelle Bachelet en el aniversario del Colegio de Periodistas de Chile, Santiago, 11 de julio de 2006.

2. Pronunciamiento de Hugo Chávez disponible en <[www.tnv.gov.ve](http://www.tnv.gov.ve)>.